Comentario jurisprudencial

Comentario jurisprudencial al caso *Mendoza y otros vs. Argentina* de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Mireya Castañeda Hernández*

Introducción

El presente comentario jurisprudencial versa sobre el Caso Mendoza y otros resuelto en 2013 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de Argentina,¹ derivado, entre otros elementos, de la prisión perpetua impuesta a cinco jóvenes argentinos por delitos cometidos cuando aún eran niños, siendo sometidos a condiciones de detención en donde uno de ellos perdió la visión sin que el Estado hubiera otorgado tratamiento médico adecuado, asimismo, junto con otro joven, sufrió de actos de tortura y otro de los cinco jóvenes murió, sin que mediara una investigación efectiva.

Un tema central en este caso fueron los derechos del niño, al respecto la Corte Interamericana señaló que se entiende por “niño” a toda persona que no ha cumplido 18 años de edad.² En este sentido, ocupa un lugar prioritario el principio del interés superior del niño para la máxima satisfacción y mínima restricción de derechos de las niñas, niños y adolescentes. En el fallo se destaca la obligación de los Estados para ajustar el marco legal y las políticas públicas a los estándares internacionales en materia de justicia penal juvenil y a la implementación de medidas destinadas a la prevención de la delincuencia juvenil.

* Investigadora del Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH.

¹ Corte IDH, *Caso Mendoza y otros vs. Argentina*, excepciones preliminares, fondo y reparaciones, sentencia de 14 de mayo de 2013, Serie C no. 260.

² *Ibidem*, párrs. 67 y 140.

Comentario jurisprudencial

Mireya Castañeda Hernández

190

El tribunal interamericano se ha referido en otras ocasiones a los derechos de los niños, por ejemplo, en el *Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales) vs. Guatemala*, relativo al secuestro y homicidio de un grupo de jóvenes que eran “niños de la calle” en una época que en Guatemala existía un patrón de acciones perpetradas por agentes de seguridad estatal como un medio, al margen de la ley, de contrarrestar la delincuencia juvenil,³ en aquella ocasión se refirió, en particular, a los derechos del niño,⁴ a partir del artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que destaca la protección por parte de la familia, la sociedad y el Estado.⁵ En ese caso la Corte Interamericana se refirió al *corpus iuris* internacional de protección de los niños que debe servir para fijar los alcances del numeral 19 del Pacto de San José.⁶ Asimismo, en la Opinión Consultiva 17/02 relativa a la *Condición jurídica y derechos humanos del niño* abordó un panorama amplio y completo de los derechos del niño,⁷ entre otros elementos, uno que considero de especial importancia es el relativo a los deberes de la familia, la sociedad y el Estado.⁸

En este orden de ideas, se puede señalar que la temática de prevención de la delincuencia y justicia penal de adolescentes no es ajena al contexto nacional en México.⁹ En 2012, de acuerdo con el informe de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval),¹⁰ niñas, niños y adolescentes mexicanos es el sector de la población que registró los mayores porcentajes de pobreza con el 53.8 % y pobreza extrema con el 12.1 %.¹¹ Julio Scherer García, periodista mexicano, en su libro intitulado *Niños en el crimen*,¹² aborda la cruda temática en la que el crimen ha llegado a la infancia. El autor presenta su experiencia de una visita a una correccional en la Ciudad de México y la historia de más de 40 niños que cayeron en la delincuencia a muy temprana edad, casos de niñas y niños, con historias de vida no muy lejanas a las que se refiere el presente comentario jurisprudencial y que encaminan a medidas destinadas a la prevención de la delincuencia juvenil.

³ Corte IDH, *Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala*, fondo, sentencia de 19 de noviembre de 1999, serie C, no. 63, párrs. 76 a 79.

⁴ *Ibidem*, párrs. 178 a 198.

⁵ *Ibidem*, párr. 187.

⁶ *Ibidem*, párr. 194.

⁷ Corte IDH, Opinión Consultiva OC-17/2002, *Condición jurídica y derechos humanos del niño*, de 28 de agosto de 2002.

⁸ *Ibidem*, párrs. 62 a 91.

⁹ *Vid.*, Sergio García Ramírez y Olga Islas de González Mariscal, coords., *Foro sobre Justicia Penal y Justicia para Adolescentes*, México, UNAM, 2009.

¹⁰ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, *Informe de pobreza en México 2012*. México, Coneval, 2013, p. 51.

¹¹ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y UNICEF, *Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes México, 2008-2010*. México, Coneval / Unicef, 2013, pp. 31 y 33.

¹² Julio Scherer García, *Niños en el crimen*. México, Grijalbo, 2013.

En México, con posterioridad a la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño, de Naciones Unidas,¹³ la justicia para adolescentes fue protegida, en un primer momento,¹⁴ por la Ley Federal de Menores Infractores, en la década de los noventa.¹⁵ En el 2000,¹⁶ fue promulgada la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que dedicó sus artículos 44 a 47 a “el derecho al debido proceso en caso de infracción a la Ley penal”. En 2005,¹⁷ tuvieron lugar modificaciones a la Constitución Federal en materia de justicia para adolescentes, consagradas en el artículo 18, derivada de ellas fue publicada la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, en 2012, en vigor a partir de 2014.¹⁸

Por otro lado, el presente comentario jurisprudencial pretende unirse a los diversos esfuerzos de acercamiento a la jurisprudencia interamericana, que se considera son pertinentes y oportunos; lo anterior, en el marco de la modificación a la Constitución Federal en México en materia de derechos humanos, publicada en 2011,¹⁹ así como de las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana, en particular, en el expediente Varios 912/2010 y en la Contradicción de Tesis 293/2011.²⁰

Las modificaciones constitucionales en materia de derechos humanos, de 2011, que fortalecieron la protección de derechos humanos en tratados internacionales, sin duda, han generado diversos cambios, entre ellos, en el desarrollo jurisprudencial interno, mismo que, se encuentra en constante perfeccionamiento. Ejemplo de ello es el expediente Varios 912/10, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México con motivo del cumplimiento de la sentencia del *Caso Radilla Pacheco vs. México* de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.²¹ En aquella ocasión la Suprema Corte mexicana abordó las implicaciones de la jurisprudencia interamericana, en donde distinguió entre criterios obligatorios y criterios orientadores, al efecto emitió dos tesis ju-

¹³ Publicada en el *Diario Oficial* de la Federación el 25 de enero de 1991.

¹⁴ *Vid.*, Alicia Azzolini, “La reforma de la justicia para adolescentes en el Distrito Federal”, en *op. cit.*, *supra* nota 9, p. 84.

¹⁵ Publicada en el *Diario Oficial* de la Federación el 24 de diciembre de 1991, abrogada a partir del 27 de diciembre de 2014.

¹⁶ Publicada en el *Diario Oficial* de la Federación el 29 de mayo de 2000.

¹⁷ Publicadas en el *Diario Oficial* de la Federación el 12 de diciembre de 2005. A. Azzolini, *op. cit.*, *supra* nota 14, p. 84.

¹⁸ Publicada en el *Diario Oficial* de la Federación el 27 de diciembre de 2012 y en vigor a partir del 27 de diciembre de 2014, que abroga a partir de dicha fecha la “Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal”. *Vid.*, Mónica González Contró *et al.*, *Propuesta teórico-metodológica para la armonización legislativa desde el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes*. México, UNAM / DIF, 2012, p. 180.

¹⁹ Publicada en el *Diario Oficial* de la Federación el 10 de junio de 2011.

²⁰ La primera de ellas publicada en el *Diario Oficial* de la Federación el 4 de junio de 2011 y la segunda resuelta el 3 de septiembre de 2013, aún pendiente de publicación al momento de escribir las presentes líneas.

²¹ Corte IDH, *Caso Radilla Pacheco vs. México*, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 23 de noviembre de 2009, Serie C no. 209.

Comentario jurisprudencial

Mireya Castañeda Hernández

192

jurisprudenciales en la materia.²² En tanto, en la Contradicción de Tesis 293/11, entre otros temas que exceden su abordaje en este momento, se refirió ya en términos generales a la obligatoriedad de la jurisprudencia interamericana.

Lo anterior, enmarca los debates nacionales en torno a la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados en la materia. Como ha señalado Niklas Luhmann,²³ en ciertos sistemas, como el jurídico, un elemento esencial es la reducción de complejidad, en ese sentido se considera que pueden ser oportunas las diversas herramientas que se generen con tal propósito como lo es el buscador de jurisprudencia que se ha generado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana,²⁴ pero también y de la mano la búsqueda de un acercamiento a los diversos temas de la jurisprudencia interamericana, es en ese sentido que pretende contribuir el presente comentario jurisprudencial.

I. Consideraciones de la Corte Interamericana sobre derechos conculcados en el caso

En el presente apartado se abordarán los hechos probados de la sentencia y las consideraciones de la Corte Interamericana en relación a los derechos conculcados. Para ello se comenzará con una referencia a los antecedentes de la infancia de estos niños. En segundo lugar, a las sanciones de prisión perpetua a los niños, la pérdida de visión de uno de ellos y su falta de atención médica, los actos de tortura perpetrados a dos de ellos, la muerte de uno y su falta de investigación.

1. Antecedentes sociales y familiares durante su infancia

Los cinco jóvenes tuvieron antecedentes sociales y familiares comunes en su infancia, como fueron: crecer en barrios marginales, con exclusión económica que condicionó su desarrollo integral, como el abandono de estudios primarios y secundarios, la mayoría de ellos con estructuras familiares desintegradas y antes de cumplir los 18 años pasaron gran parte de su vida en

²² Vid., Rubro: SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO, Tesis P. LXVI/2011 (9a), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, diciembre de 2011, p. 556; Rubro: CRITERIOS EMITIDOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO NO FUE PARTE. SON ORIENTADORES PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEAN MÁS FAVORABLES A LA PERSONA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Tesis P. LXVI/2011 (9a), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, diciembre de 2011, p. 550.

²³ Niklas Luhmann, *Sistemas sociales. Lineamientos para una teoría general*. Trad. de Silvia Pappe y Brunilde Erker. Barcelona, Anthropos, 1998, p. 63 y ss.

²⁴ www.buscacdh.bjdh.org.mx/inicio.aspx (consultado marzo 2014).

institutos de menores por haber tenido contacto con la justicia penal.²⁵ Al respecto, la Corte Interamericana en la Opinión Consultiva 17/02,²⁶ había señalado que: “hay niños expuestos a graves riesgos o daños que no pueden valerse por sí mismos, resolver los problemas que les aquejan o encauzar adecuadamente la propia vida, sea porque carecen absolutamente de un medio familiar favorable, que apoye su desarrollo, sea porque presentan insuficiencias educativas, alteraciones de la salud o desviaciones de comportamiento que requieren la intervención oportuna y esmerada de instituciones”.²⁷ En el presente caso las situaciones eran las siguientes:

- *César Alberto Mendoza* nació en 1978, abandonado desde temprana edad por ambos padres fue detenido desde los 12 años por tentativa de robo e ingresó a un instituto de menores desde los 14 años por consumo de marihuana y nuevamente tentativa de robo.
- *Claudio David Núñez* nació en 1979, ingresó a institutos para niños a partir de los 14 años por verse implicado en el homicidio de su padre, quien golpeaba a toda su familia y sometía sexualmente a una de sus hermanas. Como será abordado, estando privado de su libertad fue objeto de tortura, sin que mediara investigación al respecto.
- *Lucas Matías Mendoza* nació en 1980, fue abandonado por su padre y vivió en una situación económica precaria bajo el cuidado de su madre, creciendo en un barrio en donde era cotidiano que muriera una persona, ingresó a institutos de menores en 1997. Como será abordado, estando privado de su libertad sufrió pérdida de visión y no contó con la atención médica requerida, que lo llevó a la ceguera; asimismo, fue objeto de tortura sin que mediara investigación al respecto.
- *Saúl Cristian Roldán Cajal* nació en 1981, ejerció mendicidad desde corta edad y cuando falleció su padre ingresó en un centro de alojamiento para niños y niñas separados de sus grupos familiares, estuvo con diferentes familias cuidadoras y en el Centro de Orientación Socioeducativa (C.O.S.E).
- *Ricardo David Videla Fernández* nació en 1984, a los 14 años comenzó a trabajar, a los 15 a drogarse y a los 16 fue detenido e internado en el C.O.S.E y en diversos institutos de menores. Como será abordado, murió estando encarcelado, sin que mediara investigación al respecto.

²⁵ Corte IDH, *Caso Mendoza y otros vs. Argentina*, *op. cit.*, *supra* nota 1, párrs. 68 y ss.

²⁶ Corte IDH, Opinión Consultiva OC-17/2002, *op. cit.*, *supra* nota 7, párr. 112.

²⁷ *Ibidem*, párr. 112.

Comentario jurisprudencial

Mireya Castañeda Hernández

194

La Corte Interamericana en el *Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales) vs. Guatemala*,²⁸ ya había indicado que “todo niño tiene derecho a alentar un proyecto de vida que se debe ser cuidado y fomentado por los poderes públicos para que se desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la que pertenece”.²⁹ Esta parte, considero es de gran relevancia en el sentido de comprender, como indica el artículo 19 de la Convención Americana, que los derechos de los niños son responsabilidad no sólo de su familia, sino del Estado y de la sociedad, de esta última porque son parte de ella y su desarrollo y actos tendrán necesariamente implicaciones en ella. Como se indicó en la introducción del presente comentario, los contextos sociales y familiares señalados en este caso, no son ajenos ni lejanos a los de niñas y niños mexicanos,³⁰ por lo que es importante tener presente el compromiso social y estatal en materia de corresponsabilidad y prevención, como fue señalado por la Corte Interamericana en el presente asunto.³¹

2. Sanciones de prisión y reclusión perpetua a niños

Tres de los casos tuvieron lugar en la jurisdicción de Buenos Aires, en donde el Tribunal Oral de Menores, en 1999, condenó a cadena perpetua, por delitos cometidos cuando aún eran menores de 18 años a César Alberto Mendoza por los delitos cometidos en julio de 1996,³² y a Claudio David Núñez³³ y Lucas Matías Mendoza³⁴ por delitos cometidos en octubre de 1996 y enero de 1997.

Por otro lado, en la jurisdicción de la provincia de Mendoza, el Tribunal en lo Penal de Menores, en 2002, condenó igualmente a cadena perpetua, por delitos cometidos cuando aún eran menores de 18 años a Saúl Cristian Roldán Cajal, con declaración de reincidencia,³⁵ sin beneficio de

²⁸ Corte IDH, *Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala*, *op. cit.*, *supra* nota 3.

²⁹ Corte IDH, *Caso Mendoza y otros vs. Argentina*, *op. cit.*, *supra* nota 1, párr. 191.

³⁰ J. Scherer García, *op. cit. supra* nota 12.

³¹ *Infra*, II.2.

³² Corte IDH, *Caso Mendoza y otros vs. Argentina*, *op. cit.*, *supra* nota 1, párr. 78. Por los delitos de robo calificado perpetrado con armas en cuatro oportunidades, homicidio calificado en dos ocasiones y lesiones graves.

³³ *Ibidem*, párr. 82. Por los delitos de homicidio calificado en cinco oportunidades, robo agravado por el uso de armas reiterado en ocho oportunidades, dos en tentativa, tenencia ilegítima de armas de guerra y asociación ilícita, todos ellos en concurso real.

³⁴ *Ibidem*, párr. 82. Por los delitos de homicidio calificado reiterado en dos oportunidades, robo agravado por el uso de armas, tenencia ilegítima de armas de guerra y asociación ilícita.

³⁵ *Ibidem*, párr. 159. El 5 de noviembre de 2002 la Quinta Cámara en lo Criminal del Poder Judicial de Mendoza resolvió unificar las penas anteriores, confirmando la prisión perpetua impuesta y declarando, además, la reincidencia de Saúl Cristian Roldán Cajal.

reducción de la pena,³⁶ y a Ricardo David Videla Fernández, por delitos cometidos en mayo y julio de 2001.³⁷

La Ley aplicada en los anteriores casos fue la *Ley 22.278 relativa al Régimen Penal de la Minoridad*,³⁸ toda vez que los cinco adolescentes al momento de la comisión del hecho delictivo que se les imputaba aún no habían cumplido los 18 años. Esta ley distingue entre sujetos no punibles que comprende a los menores de 16 años y punibles, aquellos entre 16 y 18 años al momento de la comisión de los hechos imputados. No obstante, la tipificación de delitos, determinación y graduación de las penas están reguladas en el Código Penal de la Nación, que es aplicable a personas adultas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el presente caso se refirió a la arbitrariedad en las sanciones penales. Al respecto indicó que si los jueces deciden que es necesaria la aplicación de una sanción penal, y si ésta es privativa de la libertad, aun estando prevista por la ley, su aplicación puede ser arbitraria si no se consideran los principios básicos que rigen esta materia, como puede ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad.³⁹ Asimismo, se refirió al artículo 37.b) de la Convención sobre los Derechos del Niño que dispone que los Estados deben velar por que “[n]ingún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente”.

Para referirse a las medidas o penas privativas de la libertad de los niños, señaló que son aplicables los siguientes principios:⁴⁰

1. Como último recurso y durante el período más breve que proceda;⁴¹
2. Delimitación temporal desde el momento de su imposición, y
3. Revisión periódica de las medidas de privación de libertad de los niños.⁴²

³⁶ *Ibidem*, párr. 85. Homicidio agravado en concurso real con robo agravado.

³⁷ *Ibidem*, párr. 90. Homicidio agravado en concurso real con robo agravado en dos oportunidades, tentativa de robo, robo agravado, tenencia de armas de guerra, robo agravado, coacción agravada y portación ilegítima de arma civil.

³⁸ *Ibidem*, párrs. 74 y ss.

³⁹ *Ibidem*, párr. 161.

⁴⁰ *Ibidem*, párr. 162.

⁴¹ Artículo 37.b) de la Convención sobre los Derechos del Niño.

⁴² Comité de los Derechos del Niño, Observación General Número 10, *Los derechos del niño en la justicia de menores*, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007, párr. 77.

Comentario jurisprudencial

Mireya Castañeda Hernández

196

El tribunal interamericano consideró en el presente caso que el Estado violó el derecho a no ser sometido a encarcelamiento arbitrario reconocido en el artículo 7.3 de la Convención Americana en perjuicio de César Alberto Mendoza, Lucas Matías Mendoza, Saúl Cristian Roldán Cajal, Ricardo David Videla Fernández y Claudio David Núñez, en relación con *los derechos del niño y de la obligación de respetar y garantizar los derechos* reconocidos en los artículos 19 y 1.1 de dicho instrumento, al imponerles como sanciones penales la prisión y reclusión perpetuas, respectivamente, por la comisión de delitos siendo niños.⁴³ Asimismo, la Corte Interamericana consideró que de conformidad con el artículo 5.6 de la Convención Americana, que la prisión y reclusión perpetuas, por su propia naturaleza, no cumplen con la finalidad de la reintegración social de los niños, sino que este tipo de penas implican *la máxima exclusión del niño de la sociedad*, de tal manera que operan en un sentido meramente retributivo, pues las expectativas de resocialización se anulan a su grado mayor; por lo tanto, dichas penas *no son proporcionales con la finalidad de la sanción penal a niños*.⁴⁴ En este sentido, se determinó que el Estado violó el *derecho a que las penas privativas de libertad tengan como finalidad la reforma y readaptación social de los condenados*, reconocido en el artículo 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los artículos 19 y 1.1 de dicho instrumento.

En relación al derecho a la integridad personal, la perita Sofía Tiscornia,⁴⁵ durante la audiencia pública se refirió al impacto de la imposición de la pena perpetua en los adolescentes, teniendo en cuenta la etapa de desarrollo por la que estaban transitando las presuntas víctimas:

[...] todas estas personas condenadas a prisión perpetua narran que al oír la condena no logran en un primer momento darse [...] cuenta de la dimensión de lo ocurrido. Y cuando se dan cuenta el efecto es devastador, sienten que la vida ha terminado y en muchos casos piensan que lo único que puede suceder con sus vidas es quitárselas. [...] M]e parece particularmente grave por el periodo de la vida en el que esto se realiza, no son seres humanos adultos que pueden asumir absolutamente la responsabilidad de sus actos, sino que son adolescentes que están todavía en un momento de formación, que no están desarrollados como tales, que en ese momento del desarrollo, la ley, el Estado les diga hasta acá se ha llegado[. E]s un efecto realmente devastador.⁴⁶

En relación a la reacción de los cinco adolescentes sobre la prisión y reclusión perpetua señalaron lo siguiente:⁴⁷

⁴³ Corte IDH, *Caso Mendoza y otros vs. Argentina*, op. cit., supra nota 1, párr. 164.

⁴⁴ *Ibidem*, párr. 166.

⁴⁵ *Ibidem*, párr. 179.

⁴⁶ Cfr., Declaración pericial rendida por Sofía Tiscornia ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 30 de agosto de 2012.

⁴⁷ Corte IDH, *Caso Mendoza y otros vs. Argentina*, op. cit., supra nota 1, párr. 182.

- César Alberto Mendoza declaró que “[s]e sint[ió...] muerto en vida [... que] [s]e [le] acaba[ba] la vida”, en el momento que se enteró que pasaría el resto de su vida en la cárcel.⁴⁸
- Claudio David Núñez relató que en el momento que dictaron la sentencia condenatoria sintió que lo “estaban matando en vida, que no tenía un camino, nada, es como que [...] iba a morir en la cárcel”.⁴⁹
- Lucas Matías Mendoza, luego de comprender lo que significaba la prisión perpetua, presentó un escrito a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación pidiendo la eutanasia. Dijo que “prefería morir[s]e antes de estar con una perpetua”.⁵⁰
- Saúl Cristian Roldán Cajal manifestó que “[l]a condena a prisión perpetua representó un fuerte impacto para él”, pues “llevaba [...] suficiente tiempo alojado en el penal como para comprender lo que representaba cada día de vida en el encierro carcelario”.⁵¹
- Ricardo David Videla Fernández, fueron evidentes las consecuencias de una condena a prisión perpetua pues, aparentemente, lo habría llevado a terminar con su vida, y “[s]u condena a perpetuidad le generó una condición diferencial que implicó una mayor intensidad sobre los niveles de castigo ordinarios”.⁵²

En este sentido la Corte señaló que el Estado violó el *derecho al respeto de la integridad física, psíquica y moral y a no ser sometido a tortura, penas o tratos crueles inhumanos o degradantes* reconocidos en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los artículos 19 y 1.1 de dicho instrumento.

En México, como referencia, la Ley Federal de Justicia para Adolescentes,⁵³ establece:

⁴⁸ Cfr., Declaración de César Alberto Mendoza rendida ante fedatario público el 21 de agosto de 2012 (expediente de fondo, tomo II, folio 1,383).

⁴⁹ Cfr., Declaración de Claudio David Núñez rendida por video (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo XIII, folio 7,397).

⁵⁰ Cfr., Informe social sobre Lucas Matías Mendoza realizado por el Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad de la Defensoría General de la Nación, de 30 de noviembre de 2011 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo XIII, folio 6,935).

⁵¹ Cfr., Informe social sobre Saúl Cristian Roldán Cajal realizado por el Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad de la Defensoría General de la Nación, de 30 de noviembre de 2011 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo XIII, folio 6,949).

⁵² Cfr., Informe social sobre Ricardo David Videla Fernández realizado por el Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad de la Defensoría General de la Nación, de 30 de noviembre de 2011 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo XIII, folio 7,133).

⁵³ Publicada en el *Diario Oficial* de la Federación el 27 de diciembre de 2012 y en vigor a partir del 27 de diciembre de 2014, que abroga a partir de dicha fecha la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.

Comentario jurisprudencial

Mireya Castañeda Hernández

198

Artículo 121. La medida de internamiento permanente es la más grave prevista en esta Ley; consiste en la privación de la libertad y se debe cumplir exclusivamente en los centros federales de internamiento, de los que podrán salir el adolescente o adulto joven sólo mediante orden escrita de autoridad judicial”.

La duración de esta medida deberá tener relación directa con los daños causados, sin poder ser inferior a un año ni superior a cinco años cuando el adolescente o adulto joven tenga una edad de entre catorce años cumplidos y menos de dieciséis años al momento de realizar la conducta, y cuando tenga una edad de dieciséis años cumplidos y menos de dieciocho años no podrá ser inferior a dos años ni superior a siete años.

De esta forma, en el Estado mexicano, la ley referida establece como la más grave medida, el internamiento permanente, que conforme con los supuestos que establece no podrá ser superior a los cinco o siete años.

En relación al *Caso Mendoza y otros vs. Argentina*, objeto del presente comentario jurisprudencial, con posterioridad al Informe de fondo 172/10 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2012, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió casar la sentencia de *Saúl Cristian Roldán Cajal* que lo condenó a prisión perpetua e imponer la pena de 15 años.

Asimismo, una semana antes de la celebración de la audiencia pública del Caso ante la Corte Interamericana, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la sentencia del Tribunal Oral de Menores, emitida en 1999, por lo que respecta a la imposición de prisión y reclusión perpetuas a *Claudio David Núñez y Lucas Matías Mendoza* y en 2000 a *César Alberto Mendoza y Lucas Matías Mendoza* y ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Oral de Menores para que, previa audiencia, fijara nuevas sanciones a los tres condenados;⁵⁴ no obstante, al momento de emisión de la sentencia interamericana aún no quedaba firme, toda vez que el Fiscal General de la Nación presentó un recurso en contra de dicha decisión.⁵⁵ En el mismo sentido, el Tribunal Oral de Menores en 2012 concedió su excarcelación bajo caución juratoria a *César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez y Lucas Matías Mendoza*, pero en el caso de este último no se hizo efectiva por existir una anotación a la orden del juzgado.⁵⁶

La Corte Interamericana, si bien, valoró positivamente que, en el presente caso, mediante los recursos de revisión se haya logrado la revisión de las condenas de *César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez, Lucas Matías Mendoza y Saúl Cristian Roldán Cajal* aproximadamente 12

⁵⁴ Corte IDH, *Caso Mendoza y otros vs. Argentina*, op. cit., supra nota 1, párr. 94.

⁵⁵ *Ibidem*, párr. 95.

⁵⁶ *Ibidem*, párr. 97.

años después, señaló que este tipo de recurso no satisface el derecho previsto por el artículo 8.2.h) de la Convención Americana en cuanto a la posibilidad de interponer un recurso antes de que la sentencia condenatoria quede firme y adquiera calidad de cosa juzgada, por lo que consideró que Argentina violó el derecho reconocido en dicho numeral, en relación con los artículos 19, 1.1 y 2 de la misma.⁵⁷

3. Pérdida de visión de Lucas Matías Mendoza y falta de atención médica adecuada

Lucas Matías Mendoza durante su permanencia en el Instituto de Menores Dr. Luis Agote recibió un pelotazo en el ojo izquierdo en 1998, cuando aún era menor de 18 años, el diagnóstico en ese momento fue desprendimiento de retina. En 1999 se determinó que la lesión que presentaba afectó su visión de forma irreversible, sin posibilidades quirúrgicas y de tratamiento. En 2007 se determinó que había perdido totalmente la visión de su ojo izquierdo.

En 2011, el Juzgado Nacional de Ejecución Penal Número 2, considerando los informes médicos, después de aproximadamente 13 años de que Lucas Matías Mendoza recibió el pelotazo que causó desprendimiento de retina, dispuso su detención domiciliaria para que continuara de este modo el cumplimiento de la pena de prisión perpetua que le fue impuesta.⁵⁸

Al respecto, la Corte Interamericana señaló que frente a las personas privadas de la libertad, por las circunstancias propias del encierro, en donde se les impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de la vida, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, más aún si se trata de niños.⁵⁹ En ese sentido la falta de atención médica adecuada a una persona que se encuentra privada de la libertad bajo custodia del Estado podría considerarse violatoria de la Convención Americana.⁶⁰ Por otro lado, frente a niños, niñas y adolescentes privados de la libertad, el Estado debe asumir una posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño.⁶¹

⁵⁷ *Ibidem*, párrs. 260-261.

⁵⁸ *Ibidem*, párrs. 98 y 102.

⁵⁹ *Ibidem*, párr. 188.

⁶⁰ *Ibidem*, párr. 190.

⁶¹ *Ibidem*, párr. 191.

Comentario jurisprudencial

Mireya Castañeda Hernández

200

La Convención sobre los Derechos del Niño,⁶² en su artículo 24.1, reconoce “el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud”, y compromete a los Estados a esforzarse “por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”.⁶³

En este orden de ideas, la Corte Interamericana consideró que el Estado violó los *derechos al respeto de la integridad física, psíquica y moral y a no ser sometido a tortura, penas o tratos crueles inhumanos o degradantes* reconocidos en los artículos 5.1, 5.2 y 19 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de *Lucas Matías Mendoza*, por la falta de atención médica adecuada durante el tiempo en que estuvo detenido en el Instituto de Menores Dr. Luis Agote y en diversos centros de detención federales entre los años 1998 y 2011.⁶⁴

Considero que este es un punto de la mayor importancia, no sólo para el Estado argentino, sino también para México, toda vez que se remarca la importancia de la obligación del Estado de brindar la atención médica necesaria, cuando tiene bajo su resguardo a una persona, más aún cuando se trata de niños. En este aspecto considero que se puede observar que la Corte Interamericana, en relación con el artículo 19 del Pacto de San José, realizó una interpretación conforme con la Convención sobre los Derechos del Niño, de Naciones Unidas, como se ha indicado, tratado internacional del que México es parte,⁶⁵ así como de los criterios del Comité de Derechos del Niño. En el ámbito nacional, aborda el derecho a la salud el artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En el mismo sentido, considero que vale la pena reflexionar sobre este tema en otros supuestos, como el de las personas con discapacidad que también se encuentren bajo la custodia del Estado. El tema antes indicado puede encaminar a diversas reflexiones, entre otras al derecho a la salud, protegido tanto por el Pacto de San Salvador, en el ámbito interamericano, como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

⁶² Cfr., Convención de los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989.

⁶³ Corte IDH, *Caso Mendoza y otros vs. Argentina*, op. cit., supra nota 1, párr. 191.

⁶⁴ *Ibidem*, párr. 195.

⁶⁵ Promulgación publicada en el *Diario Oficial* de la Federación el 25 de enero de 1991.

4. Tortura cometida en contra de Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez y su investigación

Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez señalaron, en al menos cinco ocasiones distintas, a partir de la denuncia interpuesta por su defensor, que el 9 de diciembre de 2007 fueron objeto de golpes por parte del personal penitenciario dentro del Complejo Penitenciario Federal Número 1 de Ezeiza. Ambos declararon ante miembros de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, que integrantes del personal penitenciario los habían llevado a la “leonesa” y, entre otros, les aplicaron golpes en las plantas de los pies.⁶⁶ Según fueron constatadas en varios informes médicos, por la naturaleza y ubicación de las lesiones que presentaban, la Corte estima que ambos fueron objeto de fuertes golpes en los pies consistentes con la práctica de la “falanga”, una forma típica de tortura, y que éstos indudablemente fueron infligidos intencionalmente mientras estuvieron privados de la libertad.⁶⁷

La Corte observó que en el presente caso, las investigaciones fueron archivadas sin que el Estado haya proporcionado una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido a fin de desvirtuar la presunción de responsabilidad estatal por las torturas sufridas por Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez.⁶⁸ El tribunal interamericano en su jurisprudencia ha señalado, con anterioridad, que siempre que una persona es privada de la libertad en un estado de salud normal y posteriormente aparece con afectaciones a su salud, corresponde al Estado proveer una explicación satisfactoria y convincente de esa situación y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados.⁶⁹

A la luz de lo anterior, la Corte concluyó que el Estado es responsable por la violación de los *derechos a las debidas garantías judiciales y a un recurso efectivo* reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, así como por el incumplimiento de las obligaciones de prevenir, sancionar y garantizar la investigación de los actos de tortura establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de *Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez*.

⁶⁶ Corte IDH, *Caso Mendoza y otros vs. Argentina*, op. cit., supra nota 1, párr. 204.

⁶⁷ *Ibidem*, párr. 209.

⁶⁸ *Ibidem*, párr. 236.

⁶⁹ *Ibidem*, párr. 203.

Comentario jurisprudencial

Mireya Castañeda Hernández

202

5. Muerte de Ricardo David Videla Fernández y su investigación

Ricardo David Videla Fernández en 2005 señaló, en un escrito a mano, que en el sector en que se encontraba corría peligro su integridad física, que existía persecución psicológica por parte del personal penitenciario y que había recibido amenazas graves.⁷⁰ En ese mismo año miembros de la Comisión de Seguimiento de Políticas Penitenciarias realizaron una visita a la Penitenciaría de Mendoza, al respecto Pablo Ricardo Flores declaró que:

“[i]ngresa[ron] primeramente al pabellón 2, que es un pabellón de castigo y la primera irregularidad que constata[ron fue] que estaban alojados menores, puntualmente el interno Videla [...]. [S]e encontraban sin colchón[,] sin frazadas [...] con un encierro en la celda de más de 20 horas [...]. En las celdas no existen baños por lo tanto hacían las necesidades en bolsas de nylon, y la comida se encontraba al lado del orín y la materia fecal. [...] La condición de los baños y de todo el pabellón era realmente inhumana. [...] El agua que existía en el pabellón [...] era sumamente insuficiente para higienizarse. [...] Videla e]staba muy destruido [p]sicológicamente [...]. [El señor Flores] lo vi[o] depresivo, [...] [y el interno Videla le] manifestó que las horas de encierro lo estaban matando”.⁷¹

En junio de aquel año Ricardo David Videla Fernández fue encontrado colgado con un cinturón en un barroto de la ventana de su celda, a los 20 años.⁷² Algunos internos coincidieron en expresar que los oficiales penitenciarios no dieron importancia a las manifestaciones que había realizado de suicidarse. El médico Jefe Administrativo de División de Sanidad envió una nota al Director de la Penitenciaría Provisional de Mendoza en la cual indicó que la situación en dicha unidad era grave y que varios internos habían hablado de sus deseos de suicidio. No obstante, en el marco de la investigación un miembro de la policía científica señaló que no eran comunes los suicidios por suspensiones incompletas y que existía la posibilidad que otra persona hubiera jalado por atrás y luego hacia abajo.

Al respecto, en 2007, mediante un *Acuerdo de Solución Amistosa* en el caso número 12,532, *Internos de las Penitenciarías de Mendoza*, el Estado reconoció “la responsabilidad objetiva de la Provincia de Mendoza en el caso”, en perjuicio de Ricardo Videla, entre otras personas, por las condiciones de detención en las que se encontraba dentro de la Penitenciaría.⁷³ En aquel acuerdo el Gobierno de la Provincia de Mendoza se comprometió a realizar, en el ámbito de su competencia, todas las gestiones necesarias para que continuaran las investigaciones de todas las

⁷⁰ *Ibidem*, párr. 105.

⁷¹ *Ibidem*, párr. 107. Declaración testimonial de Pablo Ricardo Flores.

⁷² *Ibidem*, párr. 108.

⁷³ *Ibidem*, párr. 216.

violaciones a derechos humanos que derivaron en el dictado de las medidas provisionales dispuestas por la Corte Interamericana; sin embargo, el Estado no proporcionó prueba alguna que acreditara que se hubieran reanudado investigaciones por la muerte de *Ricardo David Videla Fernández* a partir de esa fecha, como fue alegado por Argentina.⁷⁴ En este sentido, la Corte ha establecido que el Estado es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención, de la observancia de los derechos a la vida y a la integridad personal de todo individuo que se halle bajo su custodia y puede considerarse responsable por la muerte de una persona cuando las autoridades no han realizado una investigación seria de los hechos seguida del procesamiento de los responsables.⁷⁵

Por lo anterior, la Corte consideró que Argentina es responsable de la violación de los derechos contenidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Stella Maris Fernández y Ricardo Roberto Videla, madre y padre de Ricardo David Videla Fernández, por la falta de la debida diligencia en las investigaciones dirigidas al esclarecimiento de la muerte de su hijo.⁷⁶

6. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno

Como se señaló en un numeral anterior,⁷⁷ en el presente caso fue aplicada la *Ley 22.278 relativa al Régimen Penal de la Minoridad*,⁷⁸ toda vez que los cinco adolescentes al momento de la comisión del hecho delictivo que se les imputaba aún no habían cumplido 18 años; no obstante, la tipificación de delitos y determinación y graduación de las penas están reguladas en el Código Penal de la Nación, que es aplicable a personas adultas.

Al respecto la Corte Interamericana señaló que la *Ley 22.278* deja un amplio margen de arbitrio al juez para determinar las consecuencias jurídicas de las personas menores de 18 años;⁷⁹ por otro lado, de forma contraria al principio de proporcionalidad los jueces pueden imponer a los niños las mismas penas que para adultos contempladas en el Código Penal de la Nación, incluyendo la privación de la libertad como sucedió en el presente caso.

⁷⁴ *Ibidem*, párr. 226.

⁷⁵ *Ibidem*, párr. 219.

⁷⁶ *Ibidem*, párr.227.

⁷⁷ *Supra*, l.2.

⁷⁸ Corte IDH, *Caso Mendoza y otros vs. Argentina*, *op. cit.*, *supra* nota 1, párr. 74 y ss.

⁷⁹ *Ibidem*, párr. 295.

Comentario jurisprudencial

Mireya Castañeda Hernández

204

En segundo lugar, el artículo 13 del Código Penal de la Nación contemplaba para la libertad provisional, en el caso de prisión perpetua, que se debían cumplir 20 años de prisión.⁸⁰ Lo anterior, consideró la Corte Interamericana, no toma en cuenta las circunstancias de cada niño e incumple el estándar de revisión periódica, siendo un plazo totalmente desproporcionado para que los niños puedan solicitar por primera vez su libertad y puedan reintegrarse a la sociedad, con ello los niños son obligados a permanecer más tiempo privados de la libertad que el tiempo vivido antes de la comisión de los delitos e imposición de la pena.

Asimismo, el tribunal interamericano señaló que seguían vigentes el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación y el artículo 474 del Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza que regulan el recurso de casación en un sentido muy restringido, ya que no es posible la revisión de cuestiones fácticas y probatorias en sentencias condenatorias por un juez o tribunal superior, lo que es contrario a lo dispuesto por el artículo 8.2.h) de la Convención.⁸¹

De tal forma la Corte concluyó que el Estado incumplió con la obligación de adoptar medidas de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención Americana, en relación con el derecho a recurrir un fallo y a los derechos del niño reconocidos en los artículos 8.2.h) y 19 de la misma, en perjuicio de César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez, Lucas Matías Mendoza, Ricardo David Videla Fernández y Saúl Cristian Roldán Cajal.⁸²

II. Medidas de reparación del daño

Los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario a imponer recursos y obtener reparaciones”,⁸³ señalan que según las circunstancias de cada caso, se les deberá dar a las víctimas de violaciones de derechos humanos una reparación plena y efectiva, en su numeral 18 precisa las siguientes formas: “restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”. La Corte Interamericana de

⁸⁰ *Ibidem*, párr. 296.

⁸¹ *Ibidem*, párr. 302.

⁸² *Ibidem*, párr. 303.

⁸³ Asamblea General, Resolución 60/147, de 16 de diciembre de 2005.

Derechos Humanos durante su labor ha desarrollado una importante jurisprudencia en materia de reparación del daño.⁸⁴

Asimismo, en México, fue publicada en 2013,⁸⁵ la Ley General de Víctimas, que dedica su Título Quinto a las medidas de reparación integral.⁸⁶ Jorge Calderón,⁸⁷ precisa la importancia que para su establecimiento tiene el “nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como con las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos”.⁸⁸ En el presente caso la Corte Interamericana estableció que la sentencia constituye *per se* una forma de reparación; asimismo estableció diferentes medidas de reparación, entre las que se encuentran las que a continuación se exponen.

1. Medidas de rehabilitación: atención médica y psicológica

El tribunal interamericano estableció que el Estado debe brindar gratuitamente, a través de sus instituciones o personal de salud especializados, y de forma inmediata, adecuada y efectiva, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico necesarios, a Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez, y el tratamiento psicológico o psiquiátrico necesario a César Alberto Mendoza y Saúl Cristian Roldán Cajal, si así lo solicitan todos ellos, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requieran, tomando en consideración los padecimientos de cada uno de ellos relacionados con el presente caso.

En particular, en el caso de Lucas Matías Mendoza, el Estado debe otorgar el tratamiento oftalmológico, quirúrgico y/o terapéutico especializado que permita atenuar o mejorar sus lesiones visuales.

2. Medidas de satisfacción: capacitación

Por otro lado, el Estado debe asegurar opciones educativas o de capacitación formales que ellos deseen, incluyendo educación universitaria, a través del sistema penitenciario o, en caso de que se encuentren en libertad, a través de sus instituciones públicas.

⁸⁴ *Vid.*, Jorge F. Calderón Gamboa, *La evolución de la “reparación integral” en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. México, CNDH, 2013.

⁸⁵ Publicada en el *Diario Oficial* de la Federación el 9 de enero de 2013, cuyas últimas reformas a la fecha son las del 3 de mayo de 2013.

⁸⁶ Artículos 61-78.

⁸⁷ J. F. Calderón Gamboa, *op. cit.*, *supra* nota 84, p. 88.

⁸⁸ *Idem.*

Comentario jurisprudencial

Mireya Castañeda Hernández

206

3. Garantías de no repetición: adecuación de normativa interna y adopción de políticas públicas

El Estado deberá ajustar su marco legal a los estándares internacionales en materia de justicia penal juvenil, y diseñar e implementar políticas públicas con metas claras y calendarizadas, así como la asignación de adecuados recursos presupuestales, para la prevención de la delincuencia juvenil, a través de programas y servicios eficaces que favorezcan el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, Argentina deberá, entre otros, difundir los estándares internacionales sobre los derechos del niño y brindar apoyo a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables, así como a sus familias.

Por otro lado, el Estado debe, dentro de un plazo razonable, adecuar su ordenamiento jurídico interno de conformidad con los parámetros establecidos en la sentencia sobre el derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior.

En otro sentido, el Estado debe implementar, en un plazo razonable, si no existieran, programas o cursos obligatorios sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y de la niñez, incluyendo aquellos relativos a la integridad personal y tortura, como parte de la formación general y continua del personal penitenciario federal y de la Provincia de Mendoza, así como de los jueces con competencia sobre delitos cometidos por niños.

Asimismo, el Estado deberá asegurar que no se vuelvan a imponer las penas de prisión o reclusión perpetuas a ninguna otra persona por delitos cometidos siendo menor de edad. De igual modo, Argentina deberá garantizar que las personas que actualmente se encuentren cumpliendo dichas penas por delitos cometidos siendo menores de edad puedan obtener una revisión de las mismas que se ajuste a los estándares expuestos en la sentencia.

4. Obligación de realizar investigaciones

El Estado debe investigar por los medios judiciales, disciplinarios o administrativos pertinentes, los hechos que pudieron contribuir a la muerte de Ricardo David Videla en la Penitenciaría de Mendoza.

Asimismo, el Estado debe conducir eficazmente, dentro de un plazo razonable, la investigación penal de las torturas sufridas por Claudio David Núñez y Lucas Matías Mendoza, para determinar las eventuales responsabilidades penales y, en su caso, aplicar efectivamente las sanciones y

consecuencias que la ley prevea, y llevar a cabo las acciones disciplinarias, administrativas o penales pertinentes en el evento de que en la investigación de los mencionados hechos se demuestren irregularidades procesales e investigativas relacionadas con los mismos.

5. Indemnización compensatoria

El Estado debe pagar las cantidades fijadas en la sentencia, por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, así como reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas la cantidad establecida.

III. Reflexiones finales

El *Caso Mendoza y otros vs. Argentina*, aborda los casos de cinco adolescentes condenados a prisión perpetua por delitos cometidos cuando aún no cumplían 18 años, sin posibilidad jurídica de que se revisará su pena. Lo anterior, por sí mismo —como se hizo referencia— implicó graves afectaciones. Uno de ellos por su condición de reclusión y sin la atención médica necesaria, perdió la visibilidad por completo de un ojo y fue fuertemente afectado el otro; asimismo, él junto con otro de los jóvenes fueron sometidos a tortura, sin que mediaran las investigaciones correspondientes y otro de los jóvenes murió, sin que tampoco mediara la investigación y se precisara si fue suicidio o fue privado de la vida.

En relación con el caso expuesto destacan, sin duda, los derechos de los niños, si bien, en el presente caso tiene un papel fundamental la legislación nacional y local argentina, existen diversos elementos que pueden ser muy interesantes para los países de la región en materia de derechos de los niños, pero también, en general, de las personas privadas de la libertad.

En ese sentido quiero destacar, en primer lugar, la Convención de Derechos del Niño y la interpretación que ha realizado el Comité de Derechos del Niño que, como fue abordado en el presente caso, establece diversas obligaciones a los Estados partes, como lo es México.

Dos elementos que me parecen de suma importancia son la legalidad y proporcionalidad de la pena, por un lado, y la obligación del Estado de prestar atención médica a las personas que se encuentran bajo su resguardo. En relación a éste último, la atención médica de las personas que se encuentran bajo el resguardo del Estado, considero que es un tema de la mayor importancia en materia de derechos humanos en dónde no sólo se pueden ubicar a las personas en prisión

Comentario jurisprudencial

Mireya Castañeda Hernández

208

o reclusión, sino a niños que se encuentran bajo su resguardo en diversas situaciones, como los que se encuentren en casas hogar,⁸⁹ así como las personas con discapacidad mental que también se encuentran en instituciones bajo el resguardo del Estado. En este sentido tiene lugar el principio de interdependencia de los derechos humanos, que en México se encuentra consagrado en el artículo 1o. de la Constitución Federal, en atención al derecho a la salud de las personas que se encuentran bajo la custodia del Estado.

Sin duda, se considera de sumo interés el acercamiento a la jurisprudencia interamericana para una mejor implementación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados interamericanos y como en el presente caso también de otros tratados internacionales en la materia, como lo es la Convención de los Derechos del Niño y la interpretación de su Comité.

⁸⁹ Corte IDH, Opinión Consultiva OC-17/2002, *op. cit.*, *supra* nota 7, párr. 78-79.